



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

AUTO N.º 0393

17 MAY 2022

Por el cual se ordena la apertura de investigación en contra del Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral de la Fundación Derecho y Equidad.

LA DIRECTORA DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial de las conferidas por el artículo 91 de la Ley 446 de 1998, artículos 7, 10 y 18 de la Ley 640 de 2001, artículos 47, 48 y ss de la Ley 1437 de 2011, 2.2.4.2.9.2 del Decreto 1069 de 2015.

I. HECHOS

Que mediante escrito radicado con el MJD-EXT22-0004945 de fecha 10 de febrero de 2022, la señora DIANA CRSITINA RUIZ ARIZA obrando como apoderada de la sociedad Inversora y Promotora Gerona S.A en liquidación en condición de quejoso, solicita se investigue al Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral de la Fundación Derecho y Equidad, quienes incurrieron en presuntas irregularidades por el presunto incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley y el reglamento del Centro de conciliación, en desarrollo de la audiencia de conciliación.

La ciudadana, expuso las razones y circunstancias de hecho así:

(...) 2.1 El día 27 de marzo de 2019 el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, en razón a la expropiación por vía administrativa parcial, sobre una zona de terreno de 3330.81 m2, con matrícula inmobiliaria 50S-40279765, proferió la resolución 1246 del rad: 20193250012466 RT. 46881, para el pago de lote de terreno.

2.2 Ordenó el pago de la suma de DOSMIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$2.443.648.757) moneda corriente, menos los descuentos que por ley se debieran realizar; ordeno que enviaran el dinero, en primera instancia al juzgado 12 C del Cto., a fin de dar trámite financiero a una demanda inscrita de Visocol contra Constructora y Promotora BCP Ltda., en Liquidación, desde el 15 de marzo del año 2002 y que si no era cobrado diez días después, el juzgado lo debería regresar a la entidad bancaria (Art 3 de la resolución).

2.3 El día 12 de septiembre de 2021, solicitamos al juzgado 12 del Cto el pago del título perteneciente a INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN NIT. 830.026.001-1.

2.4 El día 24 de septiembre de 2021, la empresa beneficiaria del título, aquí denunciante, a través de su apoderada se remitió al banco Agrario con el fin de solicitar el pago del título y le informó que el título ya había sido pagado a un sujeto VICTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO cc. 4318158. Que había sido pagado por orden del IDU. (...).

(...) 2.11 El día 28 de octubre de 2021 María del Pilar Grajales Restrepo, Directora Técnica de Predios, en asocio con Marcela Del Pilar Grajales Restrepo, dieron contestación a los dos derechos de petición con el argumento más ilegal y posiblemente ilícito que se haya visto: en resumidas cuentas, que el dinero le fue entregado al señor VÍCTR HUGO JIMÉNEZ CASTRO y justificaron el pago con una supuesta "acta de conciliación virtual" tramitada en la FUNDACIÓN, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAMIENTO SOLUCIÓN INTEGRAL DERECHO Y EQUIDAD, resolución 0167 de febrero 15 de 2018, a la cual el IDU a través de sus representantes le dieron un alcance que no le es dado al citado documento.

El acta dice estar firmada entre el señor VICTOR HUGO JIMÉNEZ CASTRO y el doctor CARLOS ADNER VIVERO DÍAZ supuestamente apoderado de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, por poder otorgado por el señor MIGUEL ARANGO DE FEX, representante legal de la compañía. Poder que nunca fue otorgado, ni conocemos de semejante atrocidad de negocio.

Anexaron el documento que registra la supuesta transacción, que a todas luces es un documento utilizado para sustentar un movimiento ilegal e ilícito.

La supuesta acta virtual no cumple requisito alguno de los exigidos por la ley para el efecto, ni presentó anexos ni evidencia de la grabación virtual.

Por el cual se ordena la apertura de investigación en contra del Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral de la Fundación Derecho y Equidad.

Anexaron el documento que registra la supuesta transacción utilizando para sustentar un movimiento ilegal e ilícito. (...)

"En razón a que, en manera alguna, el representante legal de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, el doctor MIGUEL ARANGO DE FEX, otorgó poder a abogado alguno para conciliar deuda alguna a nombre de la empresa".

Que se investiguen los hechos aquí denunciados, en la Dirección de Métodos Alternativos y Solución de Conflictos, adscrito al Despacho del señor Ministro de Justicia. Puntualmente solicitamos se requiera a la FUNDACIÓN, CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAMENTO SOLUCIÓN INTEGRAL DERECHO Y EQUIDAD NIT. 9011123416 PARA QUE PRESENTE TODAS LAS EVIDENCIAS DE LA AUDIENCIA SUB JUDICE.

Que se nos permita tener acceso a toda la documental obtenida como resultado de la investigación.

Que se ordene intervenir al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU.

Que de conformidad con los hechos y como resultado de las pesquisas se apliquen las debidas compulas de copias a los encontrados infractores de la ley.

Que se de protección a los directivos, apoderada y representante legal de INVERSORA Y PROMOTORA GERONA S.A. EN LIQUIDACIÓN, en razón a que somos víctimas de un delito a Gran escala".

II. IDENTIFICACIÓN DEL POSIBLE AUTOR DE LA FALTA

Que se trata de la Fundación Derecho y Equidad - Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral, identificado con el código número 1455, Con funcionamiento en la carrera 6 No. 27-10 oficina 209 edificio Antares, cuya creación fue autorizada el Ministerio del Interior y de Justicia mediante Resolución 1459 de fecha 05 de septiembre de 2003.

III. ACTUACIÓN PROCESAL

1. Que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.4.2.9.2 del Decreto 1069 de 2015, mediante oficio con radicado MJD-OFI22-0000011 de fecha 05 de enero de 2022, se realizó requerimiento al director del Centro de Conciliación y Arbitramento EDUARDO GRILLO OCAMPO, para que en el término de diez (10) días calendario, diera las correspondientes explicaciones a la queja presentada por la señora DIANA CRSITINA RUIZ ARIZA actuando en calidad de apoderada del quejoso.
2. Que, trascurrido el término otorgado de diez (10) días, a la Fundación Derecho y Equidad - Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral, allegó respuesta al requerimiento realizado, mediante radicado MJD-EXT22-0001178 de 14 de enero de 2022.
3. Que, el día 17 de marzo de 2022, se ordeno la apertura de diligencias preliminares, mediante el Auto No.0302 de fecha de 17 de marzo de 2022, a la Fundación Derecho y Equidad - Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral, el cual fue notificado el 18 de marzo de 2022 a las partes.
4. Que mediante oficio con radicado MJD-EXT22-0011976 de fecha 30 de marzo de 2022, la Fundación Derecho y Equidad - Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral, allego explicaciones frente al Auto No. 0302 de fecha 17 de marzo de 2022; explicaciones que esta dirección no considera suficientes probatoriamente para cerrar la presente investigación.

IV. CONSIDERACIONES

Que mediante la Ley 1444 de 2011, se escindieron del Ministerio del Interior y de Justicia los objetivos y funciones asignados al Despacho del viceministro de Justicia y del Derecho y a las dependencias a su cargo, y se creó el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Que mediante el artículo 16 del Decreto 1427 de 2017, se establecieron las funciones de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del

Por el cual se ordena la apertura de investigación en contra del Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral de la Fundación Derecho y Equidad.

Derecho dentro de las cuales está la de autorizar la creación de centros de conciliación y arbitraje y ejercer funciones de inspección, control y vigilancia de estos centros.

Que en los términos de la Ley 640 de 2001, artículo 18, el Ministerio de Justicia y del Derecho ejerce funciones de inspección, control y vigilancia sobre los centros de conciliación y/ o arbitraje, aspecto refrendado a través de pronunciamientos de la Corte Constitucional conforme a los cuales dicha competencia se limita a tales centros en cuanto tienen naturaleza operativa y administrativa, en el marco del ejercicio de una función pública de carácter administrativo que no implica la administración de justicia, esta última reservada por la Constitución Política a los conciliadores.

Que la Ley 640 de 2001, expresa a su vez que, como consecuencia de las labores de inspección, control y vigilancia, el Ministerio de Justicia y del Derecho podrá imponer las sanciones a que se refiere el artículo 94 de la Ley 446 de 1998, las cuales pueden ir desde la amonestación escrita hasta la revocatoria de la resolución que autoriza la creación del centro de conciliación. Frente a la función sancionadora de la administración la Corte Constitucional ha señalado que:

"[La] potestad sancionadora como potestad propia de la administración es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de sus fines, pues (...) permite realizar los valores del orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia propende indudablemente a la realización de sus cometidos (...)" Por esa razón se ha entendido que hace parte de las competencias de gestión que constitucionalmente se le atribuyen a la Administración "pues es indudable que si un órgano tiene la facultad jurídica para imponer una obligación o para regular una conducta con miras a lograr la realización del interés general, el incumplimiento de ese mandato correlativamente debe implicar la asignación de atribuciones sancionatorias bien sea al mismo órgano que impuso la obligación o a otro distinto, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de los castigos correspondientes". (Sentencia C-818 de 2005)

Que el artículo 2.2.4.2.9.2 del Decreto 1069 de 2015, establece que cuando por cualquier medio el Ministerio de Justicia y del Derecho conozca la existencia de un presunto incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley y sus reglamentos a un centro de conciliación y/o arbitraje, podrá, de oficio o a petición de parte, solicitar la explicación pertinente o disponer visitas al centro de conciliación y/o arbitraje correspondiente.

Que el legislador consagró en el procedimiento administrativo sancionatorio una etapa previa y facultativa para la autoridad competente, denominada averiguación preliminar, que tiene por finalidad establecer las circunstancias de un caso concreto, sobre la comisión de una falta o infracción y determinar su viabilidad. No obstante, en el caso bajo estudio se advierten presentes todos los elementos de juicio que permiten inferir la presunta existencia de una falta en contra de la ley o el reglamento por parte del centro de conciliación, situación que amerita iniciar una investigación en su contra a fin de verificar más allá de toda duda razonable la comisión de una conducta contraria a derecho.

Que el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indica:

"ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían



Por el cual se ordena la apertura de investigación en contra del Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral de la Fundación Derecho y Equidad.

procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente. (...)

Que en virtud de lo expuesto por el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, en cuanto a que el debido proceso administrativo impone a las entidades del Estado adelantar cualquier actuación o procedimiento administrativo, cuyo propósito sea crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, con la estricta observancia de los lineamientos previamente consagrados por el legislador, esto con el objeto de garantizar a los ciudadanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la función pública, la protección de sus derechos de contradicción y defensa.

Que una vez evaluado los hechos relacionados por la quejosa en su escrito, los mismos se encuentran revestidos de coherencia y razonabilidad, de igual forma, a partir de las labores de verificación de este despacho, es posible inferir la presunta comisión de una falta contra la ley y el reglamento por parte del centro de conciliación, escenario que en atención al marco constitucional y legal aquí expuesto, exige el inicio de una investigación dotada de todas las instancias y términos procesales en las que se permita a las partes el pleno ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción y el ejercicio de sus garantías fundamentales.

V. NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS

Que, de acuerdo con los hechos manifestados por la quejosa, se advierte un presunto incumplimiento de las obligaciones consagradas en el artículo 13 de la Ley 640 de 2001, artículos 22, 26, 55, 56, del Reglamento Interno del centro de Conciliación y Arbitraje solución Integral.

"ARTICULO 13. OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE CONCILIACION. Los centros de conciliación deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Establecer un reglamento que contenga:

a) Los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional;

b) Las políticas y parámetros del centro que garanticen la calidad de la prestación del servicio y la idoneidad de sus conciliadores;

c) Un código interno de ética al que deberán someterse todos los conciliadores inscritos en la lista oficial de los centros que garantice la transparencia e imparcialidad del servicio.

2. Organizar un archivo de actas y de constancias con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional.

3. Contar con una sede dotada de los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al trámite conciliatorio.

4. Organizar su propio programa de educación continuada en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

5. Remitir al Ministerio de Justicia y del Derecho, en los meses de enero y julio, una relación del número de solicitudes radicadas, de las materias objeto de las controversias, del número de acuerdos conciliatorios y del número de audiencias realizadas en cada periodo. Igualmente, será obligación de los centros proporcionar toda la información adicional que el Ministerio de Justicia y del Derecho le solicite en cualquier momento.

5. Registrar las actas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1o. de esta ley y entregar a las partes las copias".

Artículos Vulnerados del Reglamento Interno del Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral:

(...)

Por el cual se ordena la apertura de investigación en contra del Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral de la Fundación Derecho y Equidad.

ARTICULO 22. Integración de Listas y Requisitos para formar parte de ellas. Las listas oficiales del Centro contarán con un número variable de integrantes que permita atender de una manera ágil y eficaz la prestación del servicio. Para pertenecer a dichas listas, deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley, los Decretos, la Junta Directiva, y el presente reglamento.

Verificado por el Director del Centro el lleno de los requisitos se procederá a la presentación del candidato ante la Junta Directiva quien discrecionalmente decidirá sobre la solicitud de inscripción.

El Centro dispondrá de listados donde organizará a los conciliadores inscritos, a partir de la especialidad en las distintas materias jurídicas que defina el Consejo asesor. El Centro de Conciliación se reserva el derecho de determinar la especialidad o especialidades en las que los aspirantes pueden prestar determinado servicio.

ARTÍCULO 26. Responsabilidades de los Conciliadores. Además de las funciones que les asigna la Ley, los Conciliadores deberán sujetarse a los procedimientos y reglamentos establecido por el Centro.

3) Tramitar los asuntos asignados, gobernados sólo por los principios éticos que rigen la Conciliación, obrando de manera neutral, objetiva, transparente e imparcial.

10) Cumplir con los preceptos del Reglamento Interno del Centro.

ARTÍCULO 55. Papel del conciliador. El conciliador no se limita a mantener la paz o regular la discusión en la mesa de negociaciones. Debe constituirse en aquella persona que actúa como un recurso activo, a quien puede recurrirse cuando sea apropiado y necesario. El Conciliador debe estar preparado para dar sugerencias en cuanto al procedimiento y alternativas que ayuden a las partes a llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios.

Debido al estatus, experiencia y habilidad que tiene el conciliador debe estar consciente de que sus sugerencias y recomendaciones pueden ser aceptadas por las partes sin medir sus consecuencias. Por lo tanto, debe evaluar cuidadosamente el impacto de sus intervenciones o propuestas y asumir plena responsabilidad por su actuación.

ARTÍCULO 56. De los Centros de Conciliación. En el Centro de Conciliación, todos sus integrantes y colaboradores son participantes activos en la solución de conflictos; los conciliadores, tienen un deber hacia las partes, hacia su profesión o actividad y para con ellos mismos. Deben actuar de manera clara en relación con los usuarios, deben ser honestos e imparciales, promover la confianza de las partes, obrar de buena fe, ser diligentes y no buscar el propio interés.

Que el artículo 2.2.4.2.9.5, del Decreto 1069 de 2015, determina lo siguiente:

"APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO. Cuando en concepto del Ministerio de Justicia y del Derecho no se han adoptado los correctivos a que se refiere el artículo anterior, el Centro correspondiente no presenta la documentación que sustenta la adopción de correctivos en el plazo correspondiente o el Centro incurra en alguna de las conductas a que se refiere el Artículo 60 del presente Decreto, se abrirá un proceso sancionatorio el cual se sujetará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el procedimiento administrativo sancionatorio". (...).

Que, de acuerdo con lo anterior se establece un presunto incumplimiento al artículo 13 de la Ley 640 de 2001 y lo establecido en el Reglamento Interno, por parte del Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral, conforme a los hechos arriba relacionados y el material probatorio que obra en el plenario, que hasta la fecha consisten en las siguientes:

VI. PRUEBAS

1. Escrito radicado con el MJD-EXT22-0004945 de fecha 10 de febrero de 2022, la señora DIANA CRSITINA RUIZ ARIZA, en su condición de apoderado del quejoso, en el que solicitó se investigue al Centro de Conciliación de la Asociación Equidad Jurídica, por presuntas irregularidades en el desarrollo del procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante y vulneración del debido proceso.
2. Escrito de requerimiento mediante oficio MJD-OFI22-0000011 de fecha 05 de enero de 2022.
3. Respuesta al requerimiento realizado, mediante radicado MJD-EXT22-0001178 de 14 de enero de 2022.
4. Auto No.0302 de fecha de 17 de marzo de 2022, a la Fundación Derecho y Equidad -



Por el cual se ordena la apertura de investigación en contra del Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral de la Fundación Derecho y Equidad.

Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral, el cual fue notificado el 18 de marzo de 2022 a las partes.

5. oficio con radicado MJD-EXT22-0011976 de fecha 30 de marzo de 2022, con el que la Fundación Derecho y Equidad - Centro de Conciliación y Arbitramento Solución Integral allego explicaciones frente al Auto No. 0302 de fecha 17 de marzo de 2022.

VII.PRUEBAS DE OFICIO

Que a fin de verificar con certeza la existencia de una falta por parte del centro de conciliación contra la Ley o su reglamento, la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos decretará de oficio las siguientes pruebas:

1. Se sirva a explicar y allegar documentos mediante los cuales se autorizó el nombramiento del conciliador, de acuerdo con las reglas de reparto establecidas en el reglamento interno del centro, frente a la escogencia del conciliador para el caso que nos ocupa.
2. Allegar la citación para el desarrollo de la audiencia de conciliación realizadas al representante legal de la Sociedad Inversora y Promotora Gerona S.A en liquidación, ya que solo se evidencia la citación al apoderado.
3. Dar explicaciones sobre el procedimiento realizado en la conciliación de audiencia virtual conforme a lo establecido por la Ley 527 de 1999, y el artículo 103 del Código General del Proceso, atendiendo en que el reglamento interno del centro, sólo se desarrolla capítulo de audiencias virtuales para arbitramento.
4. Allegar copia del reporte realizado en el Sistema de Información de la Conciliación, el arbitraje y la Amigable Composición, frente a la audiencia de conciliación virtual (grabación o repositorio).

Abonado a lo anterior y en virtud del artículo 2.2.4.2.9.6. del Decreto 1069 de 2015, Modificado por el Art. 7 del Decreto 1885 de 2021 y en caso de hallar probado el incumplimiento de las obligaciones por parte del centro, previas las garantías del debido proceso, dependiendo de la gravedad de la conducta o del incumplimiento y en atención a las sanciones, previstas en el Artículo 94 de la Ley 446 de 1998, a fin de verificar la capacidad económica del centro de conciliación se solicitará:

1. Estados financieros del Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral, del año inmediatamente anterior, debidamente firmados y certificados por el representante legal de la institución, así como por el contador y/o revisor fiscal.

En mérito de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la ley 1437 de 2011, la Dirección de Métodos Alternativos y Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho,

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar la apertura de investigación contra el Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral de la Fundación Derecho y Equidad, por el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 640 de 2001 y los artículos 22, 26, 55, 56, del reglamento interno del centro, en relación con los hechos relacionados en la parte motiva del proveído.

SEGUNDO: Otorgar un término de quince (15) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, para que el representante legal o mediante apoderado, el Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral, presente los descargos en forma escrita, solicite práctica de pruebas y aporte las que considere pertinentes.

TERCERO: Decretar la práctica de pruebas que considere conducentes, conforme a lo previsto en el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por el cual se ordena la apertura de investigación en contra del Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral de la Fundación Derecho y Equidad.

CUARTO: Conceder una vez vencido el periodo probatorio, un término de diez (10) días al investigado para que presente los alegatos respectivos.

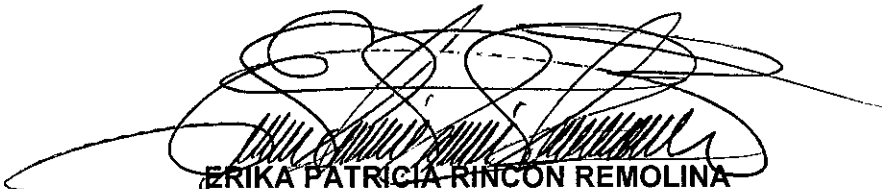
QUINTO: Notificar personalmente por medio electrónico, este acto administrativo al contra el Centro de Conciliación y Arbitraje Solución Integral de la Fundación Derecho y Equidad, representado legalmente por el señor EDUARDO GRILLO OCAMPO, identificado con cedula de ciudadanía número 19.140.588, a través del correo electrónico registrado en el Sistema de Información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición SICAAC: notificacionesfde@gmail.com y a la señora DIANA CRSITINA RUIZ ARIZA en su condición de quejosa, al correo electrónico autorizado a través de su solicitud de investigación: telealdia777@gmail.com, de conformidad con los artículos, 54, 56 y 67 de la Ley 1437 de 2011. De no lograrse la notificación personal se procederá conforme a lo dispuesto en el Capítulo V del Título III de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO: Contra el presente auto, no proceden recursos por tratarse de un acto administrativo de trámite, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

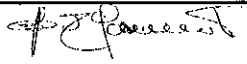

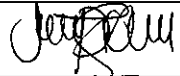
Dada en Bogotá D.C., a los

17 MAY 2022



ERIKA PATRICIA RINCÓN REMOLINA

Directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
Ministerio de Justicia y del Derecho

| | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
|---|--|--|------------|
| Proyectó: | Ilse Gamero Torres |  | 10/05/2022 |
| Revisó y Aprobó: | Jesús Arcángel Alonso Guzmán |  | 16/05/2022 |
| Revisión y Aprobación Final para firma del Despacho | Julieth Duarte Camacho Abogada especializada- Contratista Despacho |  | 16/05/2022 |